



*“Al servicio de la Justicia y de la paz social”*

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL**

**MAGISTRADA PONENTE**

**ALBA LUCIA GOYENECHE GUEVARA**

Medellín, ocho de noviembre de dos mil veintitrés.

Radicación No.	05360-31-03-002-2018-00337-01
Proceso	Ejecutivo
Demandante	Rodrigo Gonzalo Uribe López
Demandado	Transportes DYA S.A.S. y otro.
Procedencia	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí
Decisión	Confirma la sentencia apelada
Tema	Prescripción de la acción cambiaria.
Aprobación.	Proyecto aprobado en sesión virtual de la fecha.
Rdo. Interno	070-23
Sentencia n°	062-23

Conoce la Sala del recurso de APELACIÓN interpuesto por el demandante Rodrigo Gonzalo Uribe López, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí, en audiencia del 26 de julio de 2023, dentro del proceso EJECUTIVO instaurado por este en contra de TRANSPORTES DYA S.A.S. y ANTONIO JOSÉ CASTAÑO SUAZA.

## **1. ANTECEDENTES**

### **1.1. HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA.**

Manifestó la parte ejecutante que la sociedad TRANSPORTES DYA S.A.S. por intermedio de su representante legal y el señor Antonio José Castaño Suaza, suscribieron el pagaré número 0001 a favor de Rodrigo Gonzalo Uribe López, por un valor de ciento veintidós millones de pesos (\$122.000.000), con vencimiento del 17 de agosto de 2018.

Expuso que los demandados no han realizado ningún tipo de abono a la obligación ejecutada y que el título valor cumple plenamente los requisitos formales contenidos en los artículos 619, 621 y 709 del C. de Comercio, por tanto, contiene una obligación clara, expresa y exigible.

Con fundamento en lo reseñado, solicitó la ejecutante se librara mandamiento de pago a su favor y en contra de los demandados TRANSPORTES DYA S.A.S. y ANTONIO JOSÉ CASTAÑO SUAZA, por la suma de ciento veintidós millones de pesos (\$122.000.000) como capital, más los intereses moratorios causados a la tasa máxima legal vigente a partir del 18 de agosto de 2018 y hasta la cancelación de la obligación.

## **1.2. MANDAMIENTO EJECUTIVO**

El juzgador de primera instancia libró la orden ejecutiva en proveído del seis de marzo de 2019, por la suma dineraria relacionada en el libelo genitor. (pdf. 06 Cdno. Ppal.).

## **1.3 EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LOS DEMANDADOS.**

Aunque mediante proveído del nueve de marzo de 2022 se dispuso seguir adelante con la ejecución, por auto del 24 de marzo de la misma anualidad se declaró la nulidad de la actuación surtida a partir de la mencionada decisión. Así mismo, corrió traslado a la parte demandante de los siguientes medios de defensa propuestos por TRANSPORTES DYA S.A.S.:

**1.3.1. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA.** Toda vez que, como el pagaré número 0001 de fecha cinco de diciembre de 2017 objeto del presente proceso, debió ser cancelado el 17 de agosto de 2018, y el mandamiento de pago no fue notificado en la oportunidad establecida en el artículo 94 del C. General del Proceso, se cumplió el término prescriptivo de tres años.

**1.3.2. INEPTITUD DE LA DEMANDA.** En atención a que, en el lleno del pagaré conforme a la carta de instrucciones, existieron unas fallas que lo invalidan. Dijo que no se indicó la forma de notificación a los deudores de la fecha de vencimiento, además, hay contradicción entre el pagaré y la carta de instrucciones en cuanto a la

fecha de vencimiento y el monto de la obligación, pues el primero señala \$122.000.000, cuando el segundo \$75.000.000.

Expuso que el título valor base de ejecución no contiene una obligación clara, expresa ni exigible, ya que la carta de instrucciones tiene contradicciones, adicionalmente se omitió estipular intereses corrientes.

Por su parte el demandado ANTONIO JOSÉ CASTAÑO SUAZA propuso la excepción de mérito que denominó:

**1.3.3. PRECRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA.** Arguyó que desde que debió pagar el título valor, esto es, 17 de agosto de 2018, hasta la fecha de notificación del mandamiento de pago, 28 de febrero de 2022, habían transcurrido tres años, seis meses y 11 días, lo que se traduce en la prescripción del pagaré aportado como base de recaudo.

#### **1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

En audiencia del 26 de julio de 2023 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí profirió sentencia declarando probada la excepción de prescripción extintiva de la obligación cambiaria respecto de los demandados TRANSPORTES DYA S.A.S. y ANTONIO JOSÉ CASTAÑO SUAZA. En consecuencia, ordenó cesar la ejecución promovida por Rodrigo Gonzalo Uribe López y el levantamiento de las medidas cautelares practicadas. (Fol. 34pdf, cuaderno digital principal).

#### **1.5. APELACIÓN Y ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.**

Dentro del término consagrado para ello, el apoderado del demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado.

Manifestó que la decisión adoptada desconoce el trasegar del proceso, pues se había solicitado al juzgado una certificación sobre la suspensión de términos de tuvo el presente proceso la cual no se expidió.

Dijo que el conteo de términos de prescripción en este asunto no podía realizarse de manera objetiva, como lo hizo el juzgado de primera instancia, en tanto hay que

descender al trámite del caso concreto, como lo advirtió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC1688 del 20 de febrero de 2015, al recalcar que el término consagrado en el artículo 94 del C. General del Proceso tenía un carácter subjetivo.

Resaltó que la parte demandante fue diligente en el trámite procesal y la demora en la notificación de la parte demandada fue a causa del juzgado de primera instancia e incluso a la actitud asumida por los demandados de rehusar la recepción de las citaciones enviadas. Dijo que hay que descontar del conteo de términos de prescripción el interregno que estuvieron suspendidos por el decreto de la emergencia sanitaria, y además cuando no se tuvo un acceso normal al expediente por este motivo.

Al momento de correr traslado para que se presentaran los alegatos en segunda instancia, reiteró los argumentos presentados en primera instancia. Insistió que el término de prescripción debe computarse de manera subjetiva y atendiendo las particularidades del proceso, cuya posición ha sido prohijada por la Corte en sentencia STC10184 de 2019. Dijo que no se tuvo en cuenta la conducta omisiva del extremo pasivo para dilatar el trámite de notificación, la cual no puede generar consecuencias negativas al derecho del demandante.

## **2. CONSIDERACIONES.**

**2.1. PRESUPUESTOS PROCESALES.** Revisada la actuación cumplida no se observa impedimento alguno para proferir sentencia de mérito, pues la demanda reúne los requisitos legales, su trámite se ha cumplido con sujeción al rito del proceso ejecutivo, ante juez competente, y están demostradas la capacidad para ser parte, para comparecer al plenario, así como el interés para obrar, tanto por activa como por pasiva. Además, no se advierte configurado algún vicio que afecte la validez del trámite, ni motivo para que el Tribunal se abstenga de resolver.

**2.2. PROCESOS EJECUTIVOS.** Por sabido se tiene que el litigio del tenor que nos ocupa reclama la existencia de una obligación clara, expresa y exigible que conste, entre otros, en un documento proveniente del deudor o de su causante y que constituya plena prueba en contra de él, siendo esa la razón para que con la demanda

deba allegarse un documento de la condición anotada, ello según lo previene el art. 422 del C. G. del P. Por lo que, cualquier hecho que tienda a desconocer la existencia o exigibilidad de dicha obligación debe alegarlo y probarlo el ejecutado según lo reglado en el artículo 167 del C.G.P.

En el caso *sub-examine*, para invocar la ejecución se presentó un pagaré, pretendiéndose ejecutar la obligación contenida en el mismo, más los intereses moratorios causados, respecto de los cuales, los demandados alegaron caducidad de la acción ejecutiva, ineptitud de la demanda y prescripción.

**2.3. LA APELACIÓN.** El mandatario del accionante Rodrigo Gonzalo Uribe López, presentó recurso de alzada, aduciendo en términos generales que en este asunto no se configura la prescripción de la acción cambiaria, si se tiene en cuenta la suspensión de términos que acaeció en el proceso debido al decreto de la emergencia sanitaria y al trámite específico dado por el juzgado de primera instancia; es decir que el conteo de términos, tanto de notificación a los demandados como de prescripción en este asunto, no podía realizarse de manera objetiva.

Frente al fenómeno de la prescripción, debe indicarse que el artículo 2512 del Código Civil la define como:

*La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.  
Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción.*

*En su modalidad extintiva el artículo 2535 de la misma codificación la regula de la siguiente manera:*

*La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones.*

Frente a esta figura jurídica, la Corte Suprema de Justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos (Sentencia de Casación 6575 de 2015, Exp. 73001-31-03-003-2007-00115-01, M.P. JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ)

*La prescripción liberatoria o extintiva de derechos personales es un modo de extinguir los derechos y las acciones a consecuencia del transcurso de un lapso predeterminado en la ley, sin que el titular de esos derechos y*

*acciones los haya ejercido. Su consolidación se supedita a que la acción sea prescriptible, que es la regla general<sup>1</sup>; a que transcurra el tiempo legalmente establecido teniendo en consideración la interrupción y suspensión de que puede ser objeto; y a que el titular del derecho de acción se abstenga en ese tiempo de ejercer el derecho en la forma legalmente prevenida. “Se cuenta este tiempo -establece el último inciso del artículo 2535 del Código Civil- desde que la obligación se haya hecho exigible”.*

En tratándose de la acción cambiaria, esto es, derivada de los derechos incorporados en títulos valores, hay que tener presente que, para el caso de la acción directa, como en este caso, el artículo 789 del C. de Comercio establece que esta prescribe en tres años a partir del día de su vencimiento.

Descendiendo al caso concreto, lo primero que debe quedar claro es que ambos demandados propusieron la excepción de prescripción, tal y como puede evidenciarse en los escritos obrantes en los PDF. 16 y 26 del cuaderno principal, donde se hizo alusión al término prescriptivo de tres (3) años del título valor aportado como base de recaudo.

De la verificación de las actuaciones procesales en el expediente, se tiene que la presente demanda ejecutiva fue presentada el 10 de diciembre de 2018, la orden de apremio data del 6 de marzo de 2019, la cual fue corregida mediante auto del 21 de marzo de 2019, notificado por estado del 28 de marzo de la misma anualidad, y, aunque en un principio se había ordenado seguir adelante con la ejecución, fue declarada la nulidad de lo actuado mediante proveído del 24 de marzo de 2022, a partir de la citada providencia. En consecuencia, se tuvo por notificada a la sociedad TRANSPORTES DYA S.A.S. por conducta concluyente en los términos del inciso final del artículo 301 del C. General del Proceso, el 24 de febrero de 2022, y el señor Antonio José Castaño Suaza fue notificado personalmente en la forma prevista en el artículo 8º del Decreto 806 de 2020, el uno (1) de marzo de 2022, segundo día hábil siguiente al envío del mensaje de datos remitido para el efecto.

Como puede observarse, del trámite procesal se verifica que la presentación de la demanda, no tuvo la entidad de suspender el término de prescripción de la acción cambiaria, pues resulta evidente que el mandamiento de pago no fue notificado a los ejecutados dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la

---

<sup>1</sup> Como excepciones a la misma puede mencionarse la acción de partición del artículo 1374 del Código Civil, la de reclamación del estado civil de hijo, o la de deslinde y amojonamiento.

notificación del mismo al ejecutante, toda vez que este venció desde el 28 de marzo de 2020.

Como consecuencia de ello, el término prescriptivo siguió contabilizándose sin interrupción alguna desde el 18 de agosto de 2018, por lo que, lo que debe verificarse por la Sala es: si feneció el término de tres (3) años para que operara la prescripción de la acción, tal y como lo concluyó el juzgado de primer grado.

En efecto, los términos judiciales estuvieron suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, esto es, tres (3) meses y quince (15) días, en razón a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID 19, conforme a los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, con números PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC3729-2022, después de hacer una lectura conjunta de los acuerdos expedidos en el aislamiento obligatorio y el artículo 1 del Decreto Ley 564 de 2020, concluyó que, a nivel país, los términos de prescripción y de caducidad estuvieron suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 y por un plazo de 3 meses y 15 días. Allí dijo:

*“...Es así porque entre el 6 de febrero de 2020 y el 25 de marzo de 2022 transcurrieron dos (2) años y 19 días, **sin que el panorama cambie al descontar los tres (3) meses y quince (15) días que duró la suspensión de términos decretada por la pandemia de la COVID 19**, pues ello arroja un período de un (1) año, nueve (9) meses y cuatro (4) días, lo que reafirma que los recurrentes no cumplieron la carga de integrar el contradictorio dentro del año previsto en el artículo 94 en cita. Luego, la caducidad siguió su curso y, para el 25 de marzo de 2022, cuando se trabó el contradictorio, ese fenómeno legal ya se había configurado...”* (Negrilla intencional).

Luego existieron unas nuevas suspensiones de términos de manera esporádica por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante Acuerdo CSJANTA20-M01 del 29 de junio de 2020, prorrogó el cierre de los Despachos Judiciales y los términos que venían suspendidos desde el 16 de marzo del año que avanza, desde el 30 de junio al 3 de julio de 2020, por Acuerdo CSJANT 20- 62 del 30 de junio de 2020 hasta el tres de julio de 2020, también mediante Acuerdo CSJANTA20-80 del 12 de julio, se ordenó el cierre de los Despachos ubicados en la Comuna 10 y la suspensión de términos entre el 13 y el 26 de julio de 2020, y

nuevamente por Acuerdo N° CSJANTA20-87 del 30 de julio, se ordenó la suspensión de términos entre el 31 de julio y reanudando el 3 de agosto, y del 7 de agosto y reanudando el día 10 del mismo mes, pero solo para el Distrito Judicial de Medellín, todas con ocasión de la aludida pandemia.

En esa medida, necesariamente debe concluirse que la suspensión de términos para el Municipio de Itagüí, ascendió exclusivamente a tres (3) meses y quince (15) días, lo que conlleva a afirmar que indubitablemente para el momento en que se practicaron las notificaciones a los demandados, esto es, 24 de febrero y primero de marzo de 2022, la acción cambiaria ya se encontraba prescrita, por tanto, resultaba procedente su declaratoria ante la petición, se repite, por parte de los ejecutados. Es que, si contamos el término prescriptivo a partir del 18 de agosto de 2018, en principio este se consumaba el 18 de agosto de 2021, sin embargo, si se suman los tres meses y quince días, dicho interregno se cumplía el tres de diciembre de 2021, es decir, antes de la notificación efectuada a los demandados.

Ahora, el recurrente se queja de los efectos que la falta de acceso al expediente pudo haber tenido en cuanto a la configuración de la prescripción y a la forma de computar el año de que trata el artículo 94 del C. General del Proceso, pues hubo diligencia de su parte y, por el contrario, inacción del Juzgado.

En relación con este aspecto, y en tratándose de la interrupción de la prescripción de manera civil, establece el artículo 94 del Código General del Proceso. que *“la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el mandamiento ejecutivo, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término - expresa in fine la norma - los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado”*.

En cuanto al conteo del término establecido en la referida normatividad, antiguamente incluido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia desde el 2014 se ha pronunciado y de manera insistente ha sostenido que esta no es una labor en la que única y exclusivamente debe tenerse en consideración el transcurrir del tiempo, sino que además debe acudirse a criterios subjetivos tales como la diligencia de la parte demandante al agotar la notificación de su contraparte y, además de ello, la gestión evasiva que en algunos



casos asumen los demandados con el fin de evitar la materialización de la notificación, y así lograr que los efectos nocivos del artículo 90 se apliquen a su favor y en contra del ejecutante<sup>2</sup>.

De acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ha de precisarse que la prescripción no es un fenómeno en el que única y exclusivamente ha de tenerse en cuenta el mero paso del tiempo - criterio objetivo -, pues presentada la demanda antes de que ésta se configure, para que la parte ejecutante pueda beneficiarse de la interrupción civil, es su deber adelantar de manera diligente las gestiones necesarias para lograr la notificación de su oponente dentro del año establecido en el artículo 94 del Código General del Proceso, y solo en caso de que tal acto no se agote dentro de dicho lapso, deberá el juzgador acudir a un criterio subjetivo, cual es la valoración del laborío que con tal fin desplegó el demandante.

Entonces, aplicados los anteriores criterios jurisprudenciales, viable es afirmar que la excepción de prescripción de todas maneras debía prosperar en este asunto, toda vez que enterado del mandamiento de pago, el acreedor solo vino a adelantar las gestiones pertinentes para que se lograra la notificación de los demandados el 24 de marzo de 2021, como puede verificarse en los archivos 09 y 010 del expediente digital, esto es, fenecido el interregno de que trata la norma en cita, y no antes como era su carga.

Si se contrasta el tiempo transcurrido entre la notificación del auto que corrigió la orden de apremio al demandante, 28 de marzo de 2019, cuando aún prevalecía el expediente físico, y la suspensión de términos en razón a la pandemia por Covid 19, 16 de marzo de 2020, puede evidenciarse que solo le quedaban 12 días para efectuar las gestiones de notificación a los demandados, las cuales solo realizó el 24 de marzo de 2021, circunstancia que denota una falta de diligencia en este trámite por parte del ejecutante.

En esa medida, no se advierte que exista error alguno de parte de la *iudex a quo*. Fue entonces correcto el análisis, porque se aplicó debidamente la normativa atinente a la prescripción de la acción cambiaria.

### **3. CONCLUSIÓN.**

---

<sup>2</sup> SC5755 del 25 de febrero de 2014, STC1688 de marzo de 2015, STC9521 de julio de 2016, STC6500 de mayo de 2018, STC7933 de junio de 2018, STC14529 de septiembre de 2018, STC2776 de marzo de 2019 y STC10184 de agosto de 2019

Conforme lo analizado precedentemente, no hay lugar a variar la decisión de primera instancia, en la medida que los reparos expuestos por el apelante, no tuvieron la fuerza suficiente para derruir los fundamentos en los que se edificó la decisión del juez *a quo*. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, y se condenará en costas al ejecutante.

### **DECISIÓN**

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala Tercera de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí el 26 de julio de 2023, dentro del proceso EJECUTIVO instaurado por Rodrigo Gonzalo Uribe López en contra de TRANSPORTES DYA y ANTONIO JOSÉ CASTAÑO SUAZA.

**SEGUNDO:** Se condena en costas al demandante Rodrigo Gonzalo Uribe López. Se fijan como agencias en derecho la suma equivalente a DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, esto es, DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L. (\$2.320.000). Líquidense en primera instancia.

**TERCERO:** Ejecutoriada la presente decisión, devuélvase el expediente digital a su lugar de origen.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**ALBA LUCÍA GOYENECHE GUEVARA**  
Magistrada

**MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO**  
Magistrada

**NATTAN NISIMBLAT MURILLO**  
Magistrado

**Firmado Por:**

**Alba Lucia Goyeneche Guevara**  
**Magistrada**  
**Sala Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Martha Cecilia Ospina Patiño**  
**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional**  
**Sala 007 Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Nattan Nisimblat Murillo**  
**Magistrado**  
**Sala 010 Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c4a1115df2b2949f02217d6e5f16494b08cde39f91559e29a5271fe669c92e72**

Documento generado en 08/11/2023 10:43:29 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**